

Poder Judicial de la Nación

LEGAJO DE APELACIÓN FORMADO EN LA CAUSA N° CPE 780/2019, CARATULADA: “ESUCO S.A. - JCR S.A. - CPC S.A. - C&E CONSTRUCCIONES S.A. UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS SOBRE INFRACCIÓN LEY 24.769”. J.N.P.E. N° 10. SECRETARÍA N° 19 (EXPEDIENTE N° CPE 780/2019/3/CA3. ORDEN N° 30.875. SALA “B”).

Buenos Aires, de noviembre de 2022.

VISTOS:

El recurso de apelación interpuesto por la señora fiscal interviniente ante la instancia anterior contra la resolución por la cual el juzgado “a quo” dispuso “...**DECRETAR LA FALTA DE MÉRITO para procesar o sobreseer a C. G. [E.] W., como a la contribuyente ESUCO S.A. - JCR S.A. - CPC S.A. - C&E CONSTRUCCIONES S.A. - U.T.E.** (representada por J. M.), respecto de los hechos por los que fueron indagados, sin perjuicio de continuarse la investigación...”.

La presentación por la cual el señor fiscal general que actúa ante esta instancia mantuvo el recurso de apelación aludido por el párrafo anterior.

Los memoriales presentados por el representante del Ministerio Público Fiscal y la defensa de ESUCO S.A., de JCR S.A., de CPC S.A. y de C&E CONSTRUCCIONES S.A. en la oportunidad prevista por el art. 454 del C.P.P.N.

Y CONSIDERANDO:

1º) Que, por la resolución en examen, el tribunal de la instancia anterior dictó el auto de falta de mérito para procesar, o para sobreseer, de C. G. E. W. y de “...**ESUCO S.A. - JCR S.A. - CPC S.A. - C&E CONSTRUCCIONES S.A. – UTE...**” por la evasión presunta de la suma de \$ 20.295.407,21 a cuyo pago la unión transitoria de empresas aludida se habría encontrado **obligada por el Impuesto al Valor Agregado del ejercicio anual 2014, cerrado el día 31 de diciembre de aquel año.**

2º) Que, en torno al hecho presuntamente ilícito aludido por el considerando que antecede, por el dictamen mediante el cual la fiscalía interviniente solicitó en su momento la citación a prestar la declaración



indagatoria de “...la firma ESUCO S.A. - JCR S.A. - CPC S.A. - C&E CONSTRUCCIONES S.A. - UTE, a través de quien ejerza oportunamente su representación, y [de] C. G. [E.] W. -a título personal-...”, se reseñó lo siguiente: “...la contribuyente en cuestión declaró débitos fiscales en defecto para el período 12/2014 [...] la unión transitoria de empresas fue creada con el fin de llevar a cabo una obra pública en la cuenca Matanza Riachuelo, siendo contratada por la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) mediante el sistema de licitación pública [...] por la cláusula séptima de[l] contrato de locación de obra que suscribieron las partes el día 24 de octubre de 2014] se previó que: ‘Aysa otorgará a la contratista un anticipo financiero del DIEZ POR CIENTO (10%), una vez que presente una garantía mediante una póliza de seguro de caución, contratada en una compañía de seguros legalmente habilitada...’ [...] Con relación al mencionado ‘anticipo financiero’, advirtió el organismo recaudador que la contribuyente denunciada emitió, el 23/12/2014, seis facturas en favor de Aysa con un monto total en concepto de IVA de \$ 40.591.520,51, cuyos pagos fueron materializados mediante transferencias bancarias que se efectivizaron los días 22/01/2015 y 10/02/2015 [...] Los pagos que ESUCO S.A. - JCR S.A. - CPC S.A. - C&E CONSTRUCCIONES S.A. - UTE [...] recibió en concepto de ‘anticipo financiero’, conforme [se] explicó [por la denuncia inicial], generaron débitos fiscales que si bien fueron exteriorizados durante los períodos 01/2015 y 02/2015 (fecha en que se materializaron los mismos), lo cierto es que debieron ser declarados ante el fisco nacional en [e]l período 12/2014 [de conformidad con lo establecido por el art. 5, inc. “c”, de la ley 23.349, con relación al momento de perfeccionamiento del hecho imponible respectivo] Prueba de ello, añadió el fisco nacional, resultan ser las retenciones informadas por Aysa a la AFIP, pues las mismas fueron exteriorizadas el día 30/12/2014 por un total de \$ 20.295.760,24...”(confr. fs. 237/239 vta. del legajo principal).

3º) Que, en sustento del pronunciamiento dictado en los términos del art. 309 del C.P.P.N., el juzgado “a quo” expresó que “...teniendo en consideración los elementos de prueba recolectados en autos y la manifiesta discrepancia respecto del criterio normativo contable de declarar y pagar el Impuesto al Valor Agregado, que fuera suscitada entre el Fisco y la



contribuyente; por el momento no se encuentra corroborado que ESUCO S.A. - JCR S.A. - CPC S.A. - C&E CONSTRUCCIONES S.A. - UTE, haya efectuado declaraciones engañosas, como tampoco, que no haya ingresado la suma de \$ 20.295.407,21 [...] Por tales motivos, corresponde establecer si la cuestión traída a estudio se trató de ‘un pago anticipado’ [como sostiene el organismo recaudador y el Ministerio Público Fiscal] o de ‘un anticipo financiero’ [al que, según la defensa, le correspondería el tratamiento previsto por el art. 5, último párrafo, de la ley 23.349, en cuanto establece que “...cuando se reciban señas o anticipos que congelen precios, el hecho imponible se perfeccionará, respecto del importe recibido, en el momento en que tales señas o anticipos se hagan efectivos...”]; si la contribuyente efectuó declaraciones juradas engañosas; y para el caso de haberlo hecho de manera diferente a las formalmente exigidas por el organismo recaudador, [si] las mismas habrían permitido devengar en igual forma el tributo correspondiente al impuesto que se le cuestiona (IVA 12/2014 y 1 y 2/2015), y de esa manera, determinar si ocasionó o no, algún [...] tipo de perjuicio fiscal al ente recaudador...”.

Por otro lado, el tribunal de la instancia anterior agregó: “...teniendo en cuenta lo oportunamente informado por la AFIP, en punto a que C. G. [E.] W. [...] *se encuentra registrado ante dicho organismo, como Administrador de Relaciones de la contribuyente*, durante el período 2014/12, mientras que J. Miguel M. [...] *se encuentra autorizado a operar con clave fiscal en el mismo período y, que la declaración jurada del Impuesto al Valor Agregado por el período 2014/12 de la citada contribuyente fue presentada por el nombrado M.; también resulta necesario profundizar la investigación con el objeto [de] *obtener información relativa a la persona que presentó las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado en los períodos 1/2015 y 2/2015, como asimismo, quién resultó el administrador de la clave fiscal y autorizado con la misma en los mencionados períodos** [...] Ello, a efectos de establecer con mayor precisión quién o quienes -independientemente de lo que surge desde el plano formal- tuvieron o no injerencia alguna en punto a las obligaciones fiscales evadidas que le fueron imputadas...”.

Finalmente, el juzgado “a quo” expresó que “..., teniendo en consideración los argumentos de defensa, se exhibe indispensable que la [...] Dirección General Impositiva, proceda a realizar un informe más preciso respecto de la cuestión a estudio, y a partir de las tareas de circularización



pertinentes, con relación a cada una de las empresas integrante de la UTE, establezca si aqu[é]llas en sus declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado de los períodos fiscales 01/2015 y 02/2015, declararon e ingresaron los conceptos pertinentes a los débitos fiscales vinculados con los giros de dinero realizados [después de percibirse los fondos de AGUAS Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.] desde la Unión Transitoria [de] Empresas [en referencia a las facturas que, a su vez, fueron emitidas a la unión transitoria de empresas, en los mismos períodos, por cada una de las sociedades integrantes de aquélla, nuevamente en concepto de “...Anticipo financiero sobre Prestaciones y Obras a realizar...”, y que dieron lugar a créditos fiscales que la unión transitoria de empresas restó de los débitos fiscales que declaró por aquellos períodos fiscales], ello con el objeto de determinar si las sumas reclamadas a la contribuyente fueron ingresadas por las empresas que la conformaban, de cara a descartar una doble imposición por parte del Fisco; y eventualmente de realizarse una pericia contable, para el caso de que la fiscalía a cargo de la dirección de la investigación lo entienda así pertinente [...]. De ese modo, se deberá establecer si efectivamente medió conducta alguna por parte de la contribuyente como para tener por configurado el ardid exigido por la normativa tributaria...”.

4º) Que, la fiscalía interviniente ante la instancia anterior se agravió de la decisión a la que viene haciéndose alusión por estimar que los elementos de prueba incorporadas hasta el momento a la causa resultarían suficientes para adoptar respecto “...de C. G. [E.] W. y la contribuyente ESUCO S.A. - JCR S.A. - CPC S.A. - C&E CONSTRUCCIONES S.A. - UTE...”, el temperamento previsto por el art. 306 del C.P.P.N.

Después de reiterar las conclusiones que efectuó al tiempo de solicitar las citaciones a prestar la declaración indagatoria que se recordó por el considerando 2º de esta resolución, la representante del Ministerio Público Fiscal afirmó que resultaría “...innecesario que se vuelva a reiterar la confección de un informe al organismo recaudador, cuando la postura adoptada por la A.F.I.P., y que [aquella] fiscalía comparte, ha sido puesta de manifiesto en reiteradas ocasiones a lo largo de la tramitación del presente sumario...”. La misma consideración realizó en torno al peritaje contable cuya realización sugirió el tribunal de la instancia anterior. Al respecto, la señora



fiscal manifestó **que resultaría sobreabundante, pues, a su criterio, se encuentra suficientemente acreditado que la declaración jurada del Impuesto al Valor Agregado del período 12/2004 resultaría engañosa por no haber dado cuenta de los débitos fiscales que se perfeccionaron con las facturas que ESUCO S.A. - JCR S.A. - CPC S.A. - C&E CONSTRUCCIONES S.A. - UTE** emitió el día 23 de diciembre de 2014 a AGUAS Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A., de modo que “...extender aún más el trámite de la investigación implicaría prolongar innecesariamente un proceso penal en el que ya se han efectuado la totalidad de las medidas de prueba necesarias para confirmar la hipótesis delictiva denunciada...”.

Por último, con relación a la situación procesal de C. G. E. W., la fiscalía sostuvo que “...**el nombrado se encuentra registrado como administrador de relaciones de clave fiscal, siendo él quien ha inscripto, en su carácter de representante, a la contribuyente ante la Administración Federal de Ingresos Públicos...**”, que “...figura también como autorizado a operar en la cuenta corriente [...] que la contribuyente posee ante el Banco Macro...”, que se encontraría acreditada también “...la injerencia de [C. G. E.] W. en el manejo administrativo fiscal y financiero de la UTE...”, y que no cabría suponer que el hecho investigado “...pudiese haber ocurrido sin el conocimiento, la intervención personal y la voluntad de quienes ocupan cargos jerárquicos...”.

5º) Que, contrariamente a lo manifestado por la defensa de ESUCO S.A., de JCR S.A., de CPC S.A. y de C&E CONSTRUCCIONES S.A. mediante el memorial que presentó en esta instancia, no se advierte que el recurso de apelación en examen resulte formalmente improcedente por el hecho de que el temperamento previsto por el art. 309 del C.P.P.N. no generaría al Ministerio Público Fiscal agravio alguno, “...**dado que la resolución de mérito que pretende sea dictada bien podrá producirse de recabarse la evidencia aún restante...**”.

En efecto, la pretensión del Ministerio Público Fiscal de que esta Sala “B” se pronuncie en torno a la decisión de la que se trata, incluso de encerrar, como aduce la defensa, “...**una mera discrepancia técnica con el criterio del juzgador...**”, encuentra sustento en lo establecido en forma específica por el art. 311 del C.P.P.N., el cual dispone: “...**Los autos de**



procesamiento y de falta de mérito podrán ser revocados y reformados de oficio durante la instrucción. **Contra ellos sólo podrá interponerse apelación sin efecto suspensivo; del primero, por el imputado o el ministerio público; del segundo, por este último y el querellante particular...**", y lo previsto consecuentemente por el art. 449 del mismo cuerpo legal: "...**El recurso de apelación procederá contra los autos de sobreseimiento dictados por los jueces de instrucción y en lo correccional, los interlocutorios y las resoluciones expresamente declaradas apelables o que causen gravamen irreparable...**" (el resaltado es de al presente).

Por lo tanto, la solicitud de la defensa de que se declare mal concedido el recurso de apelación del Ministerio Público Fiscal, no puede prosperar.

6º) Que, por otro lado, lo manifestado por la defensa en cuanto a que los representantes del Ministerio Público Fiscal habrían admitido que las facturas que ESUCO S.A. - JCR S.A. - CPC S.A. - C&E CONSTRUCCIONES S.A. - UTE emitió a AGUAS Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. durante el mes de diciembre de 2014 respondieron a un "...**anticipo financiero...**", en lugar de a un "...**pago anticipado...**" como se adujo por la denuncia inicial, parte de una lectura sesgada del recurso de apelación interpuesto por la fiscalía interviniente, a cuyos fundamentos se remitió el señor fiscal general que actúa ante esta instancia en la oportunidad prevista por el art. 454 del C.P.P.N.

En efecto, la pretensión de la defensa de que el análisis que debe efectuarse por esta resolución se atenga al hecho de que no se encontraría controvertido el extremo aludido por el párrafo anterior, so riesgo de desconocer los límites de la acusación y en desmedro del principio de congruencia, no sólo hace foco en una referencia aislada que, como la utilización de comillas lo demuestra, constituye claramente una transcripción, sino que también omite ponderar los términos del párrafo en el que aquélla se encuentra inserta y el sentido de toda la fundamentación restante de la impugnación.

En las condiciones aludidas precedentemente, no se aprecia ajustada a las constancias del incidente la manifestación de la defensa que reza: "...*De esta manera, y conforme los términos en los que la acusación dejó*



planteados los hechos -señaló que la UTE recibió un anticipo financiero- no cabe sino que V.E. ordene al Juzgado de primera instancia que subsuma estos hechos en el derecho aplicable –lo que en el caso se traduce en la aplicación del último párrafo del art. 5 de la ley de IVA-...”. Esto así, sin perjuicio de lo que pudiera opinarse sobre el efecto vinculante que la defensa asigna a la ausencia supuesta de controversia sobre el carácter o la significación jurídica que, a nivel tributario, correspondería atribuir a la transferencia de fondos que AGUAS Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. debía realizar a ESUCO S.A. - JCR S.A. - CPC S.A. - C&E CONSTRUCCIONES S.A. - UTE en función de la cláusula séptima del contrato que aquéllas firmaron el día 24 de octubre de 2014, y de lo que pudiera estimarse sobre la posibilidad de que al “Anticipo Financiero” invocado por la defensa, pueda de todas maneras asignársele, en este caso, el tratamiento previsto por el art. 5, último párrafo, de la ley del Impuesto al Valor Agregado.

7º) Que, establecido lo expresado por los considerandos que anteceden, cabe señalar que asiste razón al Ministerio Público Fiscal en cuanto pone en duda la utilidad o la necesidad, en el estado actual del trámite de la causa, de requerir al organismo recaudador la realización de “...un informe más preciso respecto de la cuestión a estudio...”, máxime cuando el tribunal de la instancia anterior no individualizó las razones concretas que permitirían concluir que, en lo vinculado específicamente a la declaración jurada presentada por ESUCO S.A. - JCR S.A. - CPC S.A. - C&E CONSTRUCCIONES S.A. - UTE por el Impuesto al Valor Agregado del período fiscal 12/2014, se encontraría pendiente de dilucidación algún punto concerniente al aspecto objetivo de las hipótesis que, según el caso, invocan la fiscalía interviniente y la defensa respecto del hecho presunto de evasión tributaria investigado.

Por otro lado, y más allá de que se vincularían con circunstancias que habrían tenido lugar con posterioridad a la consumación presunta del hecho imputado como ilícito del que se trata, por la resolución en examen tampoco se sustentó la razón por la cual se estimó que las tareas de fiscalización llevadas adelante en su momento por el organismo recaudador, las cuales dieron lugar a la resolución administrativa de determinación de deuda en la que se sustentó la denuncia inicial y que incluyeron la circularización de las



sociedades integrantes de la unión transitoria de empresas, resultarían insuficientes para “...descartar una doble imposición por parte del Fisco...”, ni las razones que conducirían a concluir que aquel estado de cosas podría ser superado mediante la realización de un peritaje contable.

8º) Que, por lo demás, analizado en abstracto, lo expresado por el tribunal de la instancia anterior en el sentido que incluso en “...el caso de [haberse presentado declaraciones juradas por el Impuesto al Valor Agregado de los períodos fiscales 12/2014, 01/2015 y 02/2015] de manera diferente a las formalmente exigidas por el organismo recaudador...”, debería establecerse “...si [se] ocasionó o no, algún [...] tipo de perjuicio fiscal al ente recaudador...”, parecería soslayar “...que ‘...como integrante del bien jurídico protegido por la Ley Penal Tributaria, el interés patrimonial de la hacienda se concreta a través de la efectiva, completa, exacta y puntual recaudación de los tributos exigibles, en virtud de potestades que determinen cuánto, cuándo y dónde corresponde realizar el pago o el ingreso esperado [...]’ (confr. el voto del señor juez de cámara Dr. Roberto E. HORNOS por los pronunciamientos de los Regs. 344/08, 611/08 y 695/08, entre otros, de esta Sala ‘B’)...” (confr. CPE 775/2017/5/CA2, res. del 06/05/19, Reg. Interno N° 290/19, de esta Sala “B”).

En sentido similar, este Tribunal ha expresado: “...ante el carácter indisponible de las obligaciones tributarias (confr. Fallos: 290:195 y 311:2429, entre otros), mal podría admitirse que los contribuyentes alteren, en función de lo que podrían llegar a considerar mejor para los intereses financieros de aquéllos, los mecanismos de recaudación establecidos por la normativa vigente. Menos aún considerar que aquello resultaría un comportamiento inocuo en los casos en los cuales pudiese estimarse ausente un perjuicio patrimonial para el erario público a partir de una suposición sobre una suerte de compensación futura y de procedencia conjetural...” (confr. CPE CPE 1868/2013/CA1, 15/09/15, Reg. Interno N° 398/15, de esta Sala “B”, y lo expresado por los suscriptos como jueces subrogantes de la Sala “A” de esta Cámara de Apelaciones, por el considerando 15º del pronunciamiento CPE 1850/2018/4/CA3, res. del 26/05/22, Reg. Interno N° 234/22, de aquel Tribunal).



9º) Que, finalmente, en lo relacionado con la situación procesal de C. G. E. W., corresponde expresar que la posibilidad de que se advierta la necesidad de establecer o de descartar que otras personas físicas, hasta el momento no identificadas o sometidas al proceso, hayan podido tener una intervención penalmente relevante en el hecho presuntamente ilícito investigado, no constituye, en sí misma, una particularidad que sustente la decisión de declarar la falta de mérito para procesar, o para sobreseer, a un imputado que ya prestó la declaración indagatoria.

10º) Que, en función de las circunstancias puestas de resalto precedentemente, se advierte que los fundamentos brindados por el tribunal de la instancia anterior no resultan suficientes para sustentar el temperamento adoptado respecto de C. G. E. W. en los términos previstos por el art. 309 del C.P.P.N., “...reservad[o] para los casos en que se ordene la profundización de la investigación a efectos de coleccionar los elementos de juicio que resulten necesarios para disponer alguna de aquellas otras decisiones [es decir, las opciones previstas por los arts. 306 y 334 del C.P.P.N.] en torno de la situación procesal de quien hubiera prestado la declaración indagatoria...” (confr. CPE 957/2017/2/CA1, res. del 30/12/21, Reg. Interno N° 630/21, de la Sala “A” de esta Cámara de Apelaciones).

11º) Que, por lo tanto, sin adelantar opinión respecto de si se encuentran suficientemente acreditadas, o no, la materialidad del hecho presunto al que se aludió por el considerando 1º de este pronunciamiento y/o la intervención culpable de C. G. E. W. en aquél, ni en torno a si aquel suceso presunto puede estimarse penalmente relevante desde la perspectiva del delito de evasión tributaria, corresponde concluir que el auto de falta de mérito para procesar o para sobreseer dictado con relación al nombrado no resulta ajustado a derecho sobre la base de los fundamentos que exhibe aquel auto y que, en consecuencia, debe ser revocado.

12º) Que, con relación a lo dispuesto por la resolución en examen en torno a “...la contribuyente ESUCO S.A. - JCR S.A. - CPC S.A.. - C&E CONSTRUCCIONES S.A. - UTE...”, cabe poner de resalto que, con independencia de la condición de contribuyente de la Unión Transitoria de



Empresas en el Impuesto al Valor Agregado (confr. art. 4 de la ley 23.349), y de lo establecido por la primera parte del art. 14 de la ley 24.769 en orden a la responsabilidad penal eventual en los hechos, de personas humanas que actúan en nombre de otros sujetos, tanto “...el derogado art. 377 de la ley de Sociedades como el art. 1442 del Código Civil y Comercial de la Nación- actualmente vigente- disponen literalmente que [agrupamientos empresarios de aquel tipo] no constituyen sociedades ni son sujetos de derecho...” (confr. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala “E”, causa N° 11.773/2016, “IPA ARGENTINA S.A. c/ BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A. s/ ordinario”, rta. el 2 de junio de 2020), y que mediante el “...‘contrato de unión transitoria’ [...] las sociedades o los empresarios individuales se reúnen, sólo por un limitado período de tiempo, para el desarrollo o ejecución de una obra, servicio o suministro ‘concreto’ [...] su contrato de constitución debe contener las obligaciones asumidas por los componentes de la UTE, las contribuciones debidas al ‘fondo común operativo’ y los modos de financiar o sufragar las actividades comunes. Asimismo, dado que no constituye sociedad ni es sujeto de derecho, debe fijarse la proporción o método para determinar la participación de los contratantes en la distribución de sus resultados o, en su caso, los ingresos y gastos de la unión...” (confr. C.S.J.N., C.1657.XLIV., “CERRO VANGUARDIA S.A. c/ A.F.I.P. s/ demanda de repetición”, rta. el 8 de noviembre de 2011).

En el caso particular, corresponde recordar que por el contrato de constitución de ESUCO S.A. - JCR S.A. - CPC S.A. - C&E CONSTRUCCIONES S.A. - UTE se estableció que “...la Representante de la UTE en los términos del artículo 379 de la Ley 19.550 [a]ctuará en un todo de conformidad con las instrucciones que imparta el COMITÉ DIRECTIVO a través de Apoderados designados por éste...” y que “...los acuerdos necesarios para el desenvolvimiento de LA UTE serán adoptados por un COMITÉ DIRECTIVO, integrado por dos delegados alternos de cada una de LAS PARTES, cuyas designaciones se comunicarán recíprocamente entre ellas dentro de los cinco (5) días de vigencia de [aquel] contrato [...] Las decisiones, en cualquiera de los casos, se adoptarán en primera instancia por unanimidad, en segunda instancia con el acuerdo del 60% de los integrantes, considerándose a dicho efecto la participación proporcional de los mismos en



la UTE [...] en caso de no lograrse dicho 60% Esuco [S.A.] en su carácter de empresa LIDER tomará la decisión final de todos los aspectos de la administración técnica, económica y financiera. LA PARTE o LAS PARTES que pudieran considerarse afectadas por la decisión del LIDER, podrán recurrir al mecanismo de arbitraje establecido [por el mismo contrato]...”.

13º) Que, precisamente, en función de la circunstancia puesta de resalto por el párrafo primero del considerando anterior, esta Sala “B”, al resolver en otro de los incidentes de la causa a la que corresponde el presente, expresó:

“...Por lo tanto, si se tiene en cuenta que el régimen de responsabilidad penal para las personas jurídicas que se instauró por la ley 26.735, modificatoria de la ley 24.769, y que se mantuvo por el Régimen Penal Tributario aprobado por el Título IX de la ley 27.430, fue previsto para los casos en los que ‘...los hechos delictivos [...] hubieran sido realizados en nombre o con la intervención, o en beneficio de una persona de existencia ideal...’, y que la propuesta de los abogados que el tribunal de la instancia anterior designó finalmente ‘...como letrados defensores de ‘ESUCO S.A. - JCR S.A. - CPC S.A. - C&E CONSTRUCCIONES S.A. - UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS’...’ fue efectuada o ratificada por los representantes de todas las sociedades que constituyeron en su momento aquel agrupamiento empresario (confr. fs. 273, 275, 304, 311, 315 y 318 de los autos principales), corresponde establecer que la intervención en la causa de los letrados que formularon el planteo que motivó la formación de este incidente y presentaron el recurso de apelación y el memorial en examen, fue en la condición de abogados defensores de ESUCO S.A., de JCR S.A., de CPC S.A. y de C&E CONSTRUCCIONES S.A., respectivamente...” (confr. CPE 780/2019/1/CA1, res. del 29/08/22, Reg. Interno N° 382/22, de esta Sala “B”).

14º) Que, a partir de lo surge de los considerandos 12º y 13º de esta resolución en cuanto a la ausencia en la Unión Transitoria de Empresas de una personalidad jurídica propia e independiente de las sociedades que pudiesen haberla constituido, no puede entenderse válida la declaración indagatoria que se llevó adelante en la causa para que declare un agrupamiento empresario que no cuenta con la calidad de sujeto de derecho, en este caso,



ESUCO S.A. - JCR S.A. - CPC S.A. - C&E CONSTRUCCIONES S.A. - UTE, ni que por aquella vía se haya cumplido con la exigencia legal de recibir la declaración indagatoria a las personas jurídicas que podrían estar vinculadas a los hechos.

En consecuencia, corresponde declarar la nulidad del acto por el cual se pretendió recibir declaración indagatoria a “...la contribuyente ESUCO S.A. - JCR S.A. - CPC S.A. - C&E CONSTRUCCIONES S.A. - UTE...” y de todo lo actuado en consecuencia con relación a aquella unión transitoria de empresas (confr. arts. 166, 167 -inc. 3- y 168 -párrafo segundo- del C.P.P.N.).

Por ello, **SE RESUELVE:**

I. REVOCAR la resolución recurrida en cuanto por aquélla se dictó el auto de falta de mérito para procesar, o para sobreseer, de C. G. E. W.

II. DECLARAR LA NULIDAD del acto por el cual se pretendió recibir declaración indagatoria a “...la contribuyente ESUCO S.A. - JCR S.A. - CPC S.A. - C&E CONSTRUCCIONES S.A. - UTE...” y de todo lo actuado en consecuencia con relación a aquella unión transitoria de empresas.

III. SIN COSTAS (arts. 530, 531 y 532 del C.P.P.N.).

Regístrese, notifíquese, oportunamente comuníquese de conformidad con lo dispuesto por la resolución N° 96/2013 de superintendencia de esta Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico y devuélvase junto con los autos principales y la documentación reservada por la secretaría.

Firman sólo los suscriptos por encontrarse vacante la vocalía restante de esta Sala.

